

# Dos momentos en la construcción de la unidad de clase de la oligarquía colombiana: la Regeneración y el Frente Nacional

## *Two Moments in the Construction of Class Unity of the Colombian Oligarchy: The Regeneration and the National Front*

### **Sandra Milena Polo**

Escuela Superior de Administración Pública ESAP

Colombia

sanpo31@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7124-5775>

### **Germán Carvajal**

Escuela Superior de Administración Pública

Colombia

carvajal.german@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9717-5912>

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

**Fecha de recepción:** 31 de enero de 2024. **Fecha de aprobación:** 31 de julio del 2024

**DOI:** 10.15446/cp.v19n38.112605

#### **Cómo citar este artículo:**

**APA:** Polo, S. M., y Carvajal, G. 2024. Dos momentos en la construcción de la unidad de clase de la oligarquía colombiana: La Regeneración y el Frente Nacional. *Ciencia Política*, 19(38), 143 - 168, 10.15446/cp.v19n38.112605

**MLA:** Polo, S. M., y Carvajal, G. "Dos momentos en la construcción de la unidad de clase de la oligarquía colombiana: La Regeneración y el Frente Nacional". *Ciencia Política*, 19, 38, 2024, pp. 143 - 168. 10.15446/cp.v19n38.112605



Este artículo está publicado en acceso abierto bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia.

### Resumen

Este artículo es un ensayo sobre la oligarquía en Colombia y su unidad de clase expresada, fundamentalmente, en los pares terminológicos centralismo-federalismo y conservador-liberal. El ensayo apunta a una hermenéutica de estos términos en dos contextos históricos, a saber: la Regeneración y el Frente Nacional. El procedimiento es el análisis de la relación de los términos con su contexto a partir de fuentes primarias y textos de historiadores. El artículo desarrolla la premisa de que las oposiciones de los pares de términos expresaron escisiones internas a la clase oligárquica, durante el siglo XIX, pero en el XX señalaron la oposición de esta clase frente al campesinado con el cual compartió los significantes como un rasgo de identidad.

#### *Palabras clave*

*Oligarquía, campesinado, clase, liberal, conservador, identidad*

### Abstract

This article is an essay about the Colombian oligarchy and its class unity. It focuses on two pairs of opposite terms: centralism-federalism, and conservative-liberal. The essay aims to interpret these pairs of terms within two historical contexts: the Regeneration and the National Front. The analysis will involve consulting both primary sources and works by historians. The main thesis of this essay is that during the 19th century, these antithetical terms reflected an internal division within the oligarchy. In the 20th century, these terms represented the opposition of the oligarchy against the peasantry, who also inherited the same pair of opposite terms as a mark of identity.

#### *Keywords*

*Oligarchy, peasantry, class, liberal, conservative, identity*

## Introducción

Este escrito desarrolla el principio marxista de que el ser social determina la conciencia (Marx y Engels, 1987), en el contexto de la consolidación de la unidad de clase de la oligarquía colombiana. La clase es el ser social de un grupo, el cual se define por la posición que dicho grupo ocupa en las relaciones de producción. En este orden de ideas, el ser de la clase dominante se traslapa con el desarrollo de la sociedad de la cual es la clase dominante: el desarrollo de sus logros políticos, legislativos y administrativos, los cuales, en principio, emanan de decisiones de esta clase. Por ejemplo, un texto, ya cincuentenario, que promete desde su título hacer referencia al *Origen y desarrollo de la burguesía colombiana* (Peña, 1973) termina siendo un rosario de citas de las decisiones legislativas de la oligarquía colombiana, desde la independencia, aderezado con comentarios de autores diversos. Esta confusión es comprensible porque, finalmente, las leyes y organizaciones de una sociedad son la *voluntad* de la clase dominante. Otro texto, más famoso que el anterior, incurre en la misma confusión: es el de Gunder Frank sobre la lumpen-burguesía en Latinoamérica (Gunder Frank, 1973). El texto, al abordar a la clase dominante latinoamericana, se transforma en una breve historia económica general.

Sin embargo, la conciencia de clase no puede disolverse en el desarrollo institucional y organizacional de la sociedad en la cual una clase determinada asienta su dominio. De ser así, un texto como, por ejemplo, el de Kalmanovitz, titulado *Economía y Nación* (Kalmanovitz, 2003), que tiene la pretensión de ser una historia económica de Colombia, sería una descripción de la conciencia de clase de la oligarquía colombiana. El problema aquí es el carácter filosófico moderno inherente al término *conciencia*. Con este término nos movemos en el reino de las representaciones, del sujeto, etc. A esto le daremos el nombre de registro simbólico. Si bien las manifestaciones del poder social de una clase tienen expresión material en la política, la movilización de masas y el desarrollo institucional y organizacional, es en el registro simbólico de los significantes en donde se decanta la conciencia. Ejemplos de esto son las distinciones entre liberal y conservador, limpio versus común, democracia versus comunismo, derecha versus izquierda, entre otros. Desde este punto de vista, ensayaremos un análisis de la construcción de la unidad de clase de la oligarquía colombiana en dos momentos importantes para tal unidad: la Regeneración de finales del siglo XIX y el Frente Nacional de mediados del siglo XX. Se examinará, principalmente, el valor

simbólico de los significantes federalismo-centralismo, liberal-conservador, y en menor medida el de democracia-comunismo. Se trata de determinar, a grandes rasgos, el contenido que se encierra en esas oposiciones simbólicas.

La teoría de que el ser social determina la conciencia fue puntualizada luego por Marx en la teoría de la base económica y la superestructura política y jurídica (Marx, 1974). El ser social es la imbricación de la base económica con este edificio político-jurídico, al cual acompañan formas de conciencia. La clase —como apuntamos atrás— es el ser social mismo, la posición que un grupo ocupa en el desarrollo de las relaciones de producción, bien sea como agente y beneficiario de las decisiones sobre la marcha de esas relaciones, o como paciente, resignado o reactivo de las mismas. Así, el campesinado sin tierra, en el siglo XX, se benefició fugazmente de las decisiones de la oligarquía liberal, representada en los sendos gobiernos de los dos primos Lleras (Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo), pero luego comenzaron sus reveses a partir del Pacto del Chicoral, en el último gobierno frentenacionalista del conservador Misael Pastrana, con medidas que echaron por tierra parte de lo decidido en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Si bien la clase dominante es la que tiene el control principal de las relaciones de producción, la *oligarquía* solo es un sector de aquella: el sector que toma y ejecuta las decisiones relevantes, es decir, la que tiene el control político efectivo del proceso del Estado. Esto hace posible fisuras en la unidad de clase, como por ejemplo, la más reciente oposición del partido Centro Democrático y la alta dirigencia de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, al gobierno de Juan Manuel Santos, tanto por decisiones relativas al proceso de paz con un sector de las FARC, como por decisiones sobre el manejo de dineros del fondo ganadero, expresadas en el decreto 2537 de 2015 (CONtextoganadero, 2016).

El concepto de clase presupone el de *lucha de clases*. Y es este el que implica la *conciencia de clase*, o sea, la unidad colectiva en el registro simbólico a partir de la experiencia y socialización de los idénticos problemas que aquejan a los grupos en una determinada posición en el régimen de producción, y que derivan de sus relaciones con otras clases. La lucha de clases no es un deber ser, sino una constante histórica, es decir, un principio explicativo. La conciencia surge como efecto del conflicto y es que, en el desarrollo histórico de una sociedad, las decisiones de la clase dominante, para ser realizadas, han de pasar por el excurso de las clases dominadas. Por tanto, la conciencia de clase de la clase dominante

implica, necesariamente, la conciencia de la clase dominada. Así, la famosa frase de Warren Buffet sobre la lucha de clases, “*there’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning*”, hecha en primera persona tanto del singular como del plural, deja entrever el componente dialéctico y de identidad de la clase: “nosotros, los ricos, estamos ganando la lucha de clases”. Esta frase surgió porque sus propios empleados pagaban más impuestos que él mismo. La conciencia de la injusticia cometida a su favor revela el reconocimiento de su propia condición de clase, en contraposición a la mala situación de los miembros de otra. Así, la conciencia de clase de la clase dominante presupone la conciencia de las clases sometidas a su dominio, es decir, la distinción de ella misma respecto de las otras. La clase dominante objetiva a las otras mediante algún criterio, las hace clases *en sí*, mientras ella misma es clase *para sí*.

Al referirse a una clase como dominante se hace alusión a cómo obra para perpetuar su dominio, es decir, su control de las fuerzas productivas. El pensamiento liberal, al menos desde Weber, no admite el principio de la lucha de clases. Utiliza términos moderados como élites y clases subalternas. Sin embargo, el concepto de *élite*, que ha adquirido tanto prestigio últimamente, al ser definido como “minorías selectas que detentan y monopolizan el poder” (Osorio Rauld, 2015, p. 115) es equivalente al concepto de oligarquía, en su significado más antiguo: el gobierno (*archia*) de unos pocos (*olygos*). El concepto de élite es antimarxista y se ubica en una concepción substantiva, antidialéctica, de las relaciones de clase, es decir, no reconoce la constante de la lucha de clases.

Por otra parte, el prejuicio de la libertad de elección como principio universal presocial afecta las consideraciones conceptuales de las teorías sobre la élite. Por ejemplo, Albertus, al pensar un fenómeno como el de la reforma agraria no lo concibe en términos de poder y dominio, sino como una cuestión de *roles*, es decir, de *juego* (Albertus, 2021). La teoría de juegos, en su aséptico formalismo, elimina las burdas relaciones de dominio inherentes a la lucha de clases; pero a pesar de su asepsia antimarxista, debe reconocer la pluralidad de intereses contrapuestos entre los actores que juegan sus papeles. Albertus, al ocuparse del papel de las élites en las reformas agrarias en América Latina, hace uso del término élite en un sentido que delata que no quiere tocar el tema de la clase. Hace distinciones entre *la élite y los pobres*, *la élite terrateniente y la élite política*, y entre *la élite y la élite política en el poder*. La primera distinción de estas —élite versus pobres— parece obvia, pero su obviedad

solo deja claro que los pobres no pertenecen a la élite, por tanto, a la élite pertenecen los ricos. La segunda distinción —élite terrateniente versus élite política— da cuenta de que, entre los ricos, unos lo son porque acumulan tierra y los otros porque acumulan capacidad de decisión política. Pero tratándose del tema de la reforma agraria en Latinoamérica, la deriva teórica de Albertus lo lleva a sostener que los ricos que acumulan tierra son capaces de forzar las decisiones de los ricos en capacidad de decisión política, lo que significa que, en últimas, son los ricos con tierra los que deciden. Y es que, en América Latina, la denominada por Albertus *élite política* es un corolario de la *élite terrateniente*.

Un último asunto introductorio es la consideración del campesinado como clase. Si la clase es la posición que un grupo, o colectividad humana, ocupa en el proceso de las relaciones de producción, entonces los trabajadores agrarios, rurales, directos, con o sin propiedad territorial, pueden considerarse una clase, la que usualmente se denomina como campesinos. Su economía familiar, su pequeña propiedad territorial, el riesgo de proletarización por la expansión del latifundio hicieron del campesinado una clase discernible y necesaria en las relaciones de producción, por lo menos hasta la década del noventa del siglo XX (Rubio, 2012). Es esta clase la que, en la historia de Colombia del siglo XX, se enfrentó directamente con la oligarquía. Esta precisión es necesaria en la medida en que la hipótesis general de este ensayo es que la conciencia de clase de la oligarquía colombiana se desarrolló en dos momentos históricos, la Regeneración y el Frente Nacional, como una unidad de la clase frente al potencial desestabilizador del campesinado.

### **Los significantes primarios de la conciencia: el espacio y el territorio**

La oligarquía colombiana, como clase, surgió con la independencia. Puede decirse que, de facto, los criollos tuvieron control de las fuerzas productivas (como descendientes de encomenderos al inicio, luego como hacendados). Pero este control relativo no implicó necesariamente su consolidación como clase dominante, dada la naturaleza de la administración colonial, la cual, aunque con su centro distante, más allá del mar, fue sin embargo eficiente en el sostenimiento del poder de la corona. Consciente, la oligarquía criolla, de su control de las fuerzas productivas, no obstante, su dominio efectivo estuvo reprimido. La presencia del dominio español había suscitado en los criollos una unidad de clase

relativa a la oposición a ese padre común. Con su partida, la conciencia de la posibilidad del dominio efectivo llegó de golpe (Paredes, 2014, p. 331), pero su eclosión fue como una explosión de múltiples aspiraciones a los poderes regionales que, luego, se encasillaron en un par antitético: el de federalismo versus centralismo, como diferencias en la interpretación de la administración del territorio (Paredes, 2014, p. 332). Esta escisión fue irreconciliable, al menos hasta la Regeneración.

Fernando Guillén Martínez señala la guerra, en los años inmediatamente posteriores a la independencia de 1810, como la ruptura por la decisión sobre cuál gremio detentaría el poder efectivo: los hacendados, partidarios de un federalismo, o los comerciantes partidarios del centralismo (Guillén Martínez, 1979, pp. 223-338). Es decir, el espacio local del hacendado versus la centralidad de una administración que trascendiera esas localidades. Según Guillén, los hacendados ganaron y su triunfo se selló con la segunda independencia, la de 1819. Esta oposición convulsa inicial, inherente a la propia clase en sí, en su contradicción, generó la unidad de clase, cuya conciencia de clase, para sí, se construyó a partir de la conciencia territorial: regiones autónomas o un territorio administrativamente unificado. Esto se tomó todo el siglo XIX, y resulta apenas natural si partimos del supuesto de que la política, primariamente, es el dominio del territorio, independiente de que se pueda argumentar que el enfoque federalista no era más que un imaginario ingenuo inspirado en veleidosas concepciones sobre el progreso estadounidense (Paredes, 2014, p. 340). Esa veleidad del federalismo fue, sin embargo, el significante que expresó el interés de clase del hacendado y su regionalismo.

La historia de Colombia en el siglo XIX —como lo señala Guillén—, con su cohorte de guerras, es el vaivén de los avatares que constituyen las desavenencias políticas internas a la clase hacendaria. De tales desacuerdos en cuanto al modo de administración y control territorial se pasó, posteriormente, a mediados de siglo, a otra distinción significativa antitética, la de liberal versus conservador. Este par significativo fue, para la oligarquía en sí, hasta bien entrado el siglo XX, la expresión de sus fisuras como clase. El origen de esta diferencia partidista lo ubica Guillén Martínez ligado, simplemente, al dominio burocrático; sostiene que estos hacendados que se inventaron partidos opuestos (liberal versus conservador) para el acceso a la burocracia, y tramitaban este acceso por medio de guerras civiles, no tenían problemas en deshacer sus diferencias de partido en momentos convenientes, como, por ejemplo, en el

proceso de la Regeneración, la cual Guillén Martínez no duda en calificar de primer Frente Nacional (Guillén Martínez, 1986)

Hacendados que se inventan sangrientas diferencias de partido para acceder a la burocracia, y que luego las deshacen para repartírsela: la lógica de este argumento es problemática. Weber certeramente señaló que la burocracia es la forma efectiva del ejercicio del dominio, luego es coherente la explicación de las guerras por el control burocrático. Lo misterioso está en el olvido de las diferencias al repartirse la burocracia. ¿Cómo el objeto de disputa que suscita la diferencia no la mantiene luego de que es apropiado por una de las partes? Si en el control de la burocracia tanto se oponen radicalmente como se juntan, es porque las diferencias partidistas no están en relación con la simple posesión de la burocracia, y si efectivamente la Regeneración hubiera sido un primer Frente Nacional, no se explicaría, en ese sentido, el acontecimiento de la Guerra de los Mil Días, cuando los liberales, en forma sangrienta, intentaron retomar el control de la burocracia.

Germán Colmenares, igual que Guillén, parte del conflicto inicial, luego de 1810, entre hacendados y comerciantes (Colmenares, 1968). Sin embargo, a diferencia de Guillén, otorga el triunfo a los comerciantes. El carácter gremial de estas explicaciones es consistente, en principio, por el hecho de que es justamente la actividad económica la que sostiene el asentamiento de la clase dominante como tal. El hacendado afinca su poder en la región cuyo territorio está constituido por la hacienda como modo de producción. El comerciante, por razón de la movilidad implícita en su actividad, desterritorializa —como sostendría Gilles Deleuze (1994)— el espacio. En este sentido, las ideas federalistas fueron significantes consistentes con la justificación de esos poderes regionales. El centralismo, en términos gremiales, posibilitaría cierta fluidez comercial al no haber barreras internas de estados autónomos, y al posibilitar la unidad de la nación frente al exterior. El devenir del federalismo a liberalismo y del centralismo a conservatismo radica en que lo que se libera en el liberalismo son los poderes regionales de los hacendados, mientras que lo que se conserva en el conservatismo es el poder central de un estado unitario. Fue una oposición simbólica entre el uno y el múltiple.

Pero fueron los antiguos federalistas, convertidos ya en liberales, quienes lograron la primera unidad real de clase. El liberalismo logró, luego de la primera mitad del siglo XIX, hacerse con el poder, hasta finalmente imponer el federalismo de la Constitución de Rionegro, en el contexto de la agroindustria de exportación del tabaco, la quina y el

café. La distinción original por el dominio territorial, federalismo versus centralismo, se disolvió con el liberalismo del Olimpo Radical, pues los hacendados eran los mismos comerciantes y viceversa. Los hacendados se habían beneficiado con la bonanza comercial y, dice Colmenares que, realmente los mismos burgueses comerciales se habían vuelto hacendados. El Olimpo Radical mostró la identidad de clase real entre hacendados y comerciantes, en tanto a ambos les resultó conveniente el libre comercio y compartieron las mieles de la agroexportación. Esta identidad fue real, no simbólica, no fue una identidad para sí. La oposición, liberal versus conservador, se sostuvo aún en la hegemonía del radicalismo y cuando, por efecto de la crisis económica de la década de los ochenta del siglo XIX, el edificio del Olimpo Radical con sus políticas comenzó a desmoronarse, vino la respuesta de la Regeneración conservadora. Si por efecto de su poder real, el dominio económico, hacendados y comerciantes se identificaron en la agroexportación, conservaron, no obstante, su escisión simbólica hasta el siglo XX (Ospina Vásquez, 1955).

En tanto la clase dominante controla las fuerzas productivas, tiene bajo su control el devenir de la vida de las clases sometidas a su dominio y debe, en consecuencia, legitimarse como clase dominante. Esto implica que la distinción simbólica arrastre consigo un contenido imaginario, es decir, ideológico, que haga coincidir su interés de clase con el de las clases dominadas. La diferenciación simbólica interna a la oligarquía repartió los imaginarios de la libertad y el temor de Dios respectivamente entre liberales y conservadores, formas ideológicas que permitieron su legitimidad frente a las clases dominadas: el campesinado, los esclavos, los pequeños artesanos y comerciantes. Así, por ejemplo, Martínez hace un recorrido por las relaciones de alianza entre los afrodescendientes manumisos y las oligarquías liberales del Cauca lideradas por José María Obando, en la Guerra de los Supremos (Martínez, 2019). Esta alianza, entre otros, tenía como objetivo encausar la lucha de clases, iniciada desde la base esclava misma, a favor de la oligarquía liberal, con las promesas a los esclavos de libertad y ciudadanía. La guerra racial de los esclavos caucanos fue transformada en Guerra de los Supremos por la oligarquía liberal contra el gobierno conservador de José Ignacio de Márquez.

Por el lado del imaginario conservador, Mariano Ospina, el propio fundador del Partido Conservador, sirve de ejemplo. Colmenares cita las palabras de Ospina en una carta dirigida a Vicente Azuero: “la única bandera conservadora que tiene vida y muestra resolución y vigor es la que

obra por sentimientos religiosos. El rojismo no tiene más enemigo que le haga frente en la Nueva Granada que el catolicismo” (Colmenares, 1968, p. 100). Ospina pone de forma explícita la oposición simbólica de rojo versus católico. El segundo término moviliza un imaginario ideológico: el sentimiento religioso. Este sentimiento tiene como soporte de su desarrollo político a las clases dominadas; paradójicamente, sin embargo, esto queda claro en el asunto de la desamortización de los bienes de manos muertas hecha por los liberales. El tema de las tierras de la iglesia, suscitado por las medidas del gobierno liberal, pasa por la presencia muda de los pobres, los que solo tienen la fuerza de trabajo. Pero esta presencia tácita se percibe como amenaza y, en efecto, la justificación de las medidas contra la iglesia aparece en las palabras del secretario del tesoro en la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, el entonces liberal Rafael Núñez:

Sería necesario una gran dosis de justicia y de filantropía por parte de los privilegiados para que se sometieran tranquilamente al acto que les quita sus privilegios. Sería necesario el mismo acto de justicia y filantropía en los que especulan a mansalva con la inactividad e incuria inherentes a las comunidades, para que encuentren razonable la desamortización. El gobierno no ha cometido despojo, en el sentido filosófico de la palabra; no ha hecho más que dar una nueva organización al sistema rentístico de las corporaciones. Además, lo que se llama derecho, cuando por el transcurso del tiempo y el cambio de las necesidades públicas llegó a convertirse en germen del mal, debe en estricta justicia ser abolido o transformado consiguientemente (Núñez, 1849, citado por Peña, 1973, p. 56).

En primer lugar, está el principio ilustrado, liberal, de la abolición del privilegio. Luego su relación con la idea de *filantropía*, nombre decimonono para los actos de caridad. Después, la inactividad e incuria de las comunidades causada por el privilegio. En la retórica del entonces funcionario liberal Rafael Núñez la situación de las comunidades, su pobreza, justifica la expropiación de las tierras de la propia iglesia, pues los privilegios de esta son el germen del mal, hay un cambio en las *necesidades públicas*. Esto significa una conciencia de la necesidad de una redistribución de la tierra, lo que implica, de forma tácita, la consideración de los que no tienen tierra. La misma línea de argumentación dio el presidente liberal Mosquera cuando revisó los remates de la tierra que había hecho el gobierno de Murillo Toro:

Esta constitución de la propiedad no es la que corresponde a un pueblo libre, que para usar de su derecho no debe estar embarazado por estas trabas. Coloquemos pues, la propiedad en consecuencia con la democracia y demos la tierra a los que la trabajan y la hacen producir; y dejemos la renta a los que tienen que consagrarse al culto y a todos aquellos que no puedan producir (Mosquera 1849, citado por Peña, 1973, p. 58).

El pueblo, los que no tienen tierra, versus la renta. La clase dominada aparece de forma tangencial, como el sujeto posible del beneficio de una tierra expropiada a la iglesia. A quién se le ha de dar la tierra, ¿al campesino que la ha de pagar a largo plazo o el terrateniente que paga a corto plazo? La urgencia monetaria fue el criterio para optar por la segunda opción, las tierras expropiadas a la iglesia fueron a parar a manos de los latifundistas, pero las referencias a la democracia y la justicia dan cuenta del potencial factor de inestabilidad que significa el pueblo empobrecido. Las necesidades públicas, mencionadas por Núñez, eran no solo el peligro de inestabilidad democrática, por los pobres, sino también las necesidades de estabilidad financiera del Estado. La estructura estatal debía sostenerse, y se sostuvo, con ayuda de los terratenientes. La operación económica que reorganizó las rentas de las corporaciones fue un asunto de la burguesía liberal: expulsando y expropiando a la iglesia se las arreglaron entre gobierno y terratenientes.

Ahora bien, cuando el pueblo, pensado tangencialmente por los liberales, se volvió objeto directo de los conservadores lo fue —como en las palabras de Ospina— por el poder ideológico de la iglesia. El pueblo aliado de Dios. La caída del Olimpo Radical atizó la Regeneración, esta fue una suerte de acto de arrepentimiento, marcado, ciertamente, por una fuerte alianza con la iglesia católica (España, 1985, pp. 17-64). Núñez, ahora conservador, quien otrora, cuando era liberal en el Olimpo radical, como ministro de finanzas había justificado la operación económica que expropió los bienes de la iglesia, ahora, en otro discurso, inverso, solicitaba la ayuda de esa misma iglesia.

El inmenso problema democrático que diariamente crece, no ha podido ser resuelto por los economistas. Sus dogmas han tenido durante medio siglo decisiva influencia en los parlamentos, en la prensa y en la cátedra; y si ellos han contribuido a la supresión de la esclavitud, por ejemplo, en cambio han hecho surgir o permitido que surjan, los proletarios de las fábricas o los rurales que son más infelices todavía que los antiguos esclavos urbanos, el desarrollo del sentimiento religioso vuelve

a ser el arca de la civilización [...] La República espiritual con su aureola de esperanzas infinitas debe venir al socorro de la República laica (Nuñez, 1874, citado por Peña, 1973, p. 59).

El giro de Núñez se justifica nuevamente en los males públicos, esta vez, el *inmenso problema democrático* que los economistas no han resuelto y que la iglesia sí puede resolver: el peligro que representa el pueblo empobrecido. La república espiritual ayuda a la república laica, para ponerla a cubierto de la masa y, por supuesto, esta república laica está conformada por los terratenientes. El principio aducido otrora para justificar las medidas de Mosquera, de una reorganización de las rentas de las corporaciones, para eliminar los *males públicos* ocasionados por el *privilegio*, no fungió ahora cuando emergió un nuevamente ese peligro: los pobres como factor de inestabilidad. La fórmula fue restituir el poder a la iglesia mediante un concordato leonino a favor de esta. La distinción de las dos soluciones, para el mismo *problema democrático* expresa una conciencia clara de la posición de las clases: a los terratenientes las tierras de la iglesia, a los pobres *el sentimiento religioso*, los ensalmos espirituales de la misma iglesia. En ambos casos se salva el bien público.

El Olimpo Radical y la Regeneración, pese a aparecer como dos momentos políticos distintos, correspondientes como sendos enfoques de partido, coinciden en el punto de la consideración de los pobres como un peligro, como un factor de potencial desestabilización. Si bien puede sostenerse, en parte, la interpretación de Guillén, de que el control de la burocracia suscitaba las diferencias violentas entre facciones oligárquicas, sin embargo la unidad en la que se disolvía la diferencia no estaba en la burocracia poseída, sino en la conjura del peligro de sublevación de los pobres. La burocracia estimula la diferenciación simbólica porque ella misma es una estructura simbólica que posibilita el ejercicio del dominio; sin embargo, el sujeto del dominio es la otra clase, la que se opone a aquella que sostiene el poder burocrático. Esta otra clase ya no es una estructura simbólica, es el otro *real* que amenaza ese poder, en este sentido, con este otro obra el imaginario, la ideología.

Tanto Guillén Martínez como Germán Colmenares coincidieron en la vacuidad de las ideas políticas de los discursos de los conservadores y liberales en el siglo XIX, no les reconocieron un contenido positivo ligado a la realidad política de la sociedad colombiana decimonona. Pero es que el papel de la ideología no es ligarse a la realidad, como en el discurso de la ciencia, sino legitimar las pretensiones de una clase. No importa

si esos discursos se alimentaron de la ilustración francesa o de las encíclicas papales, lo importante es la forma como mediante ellos la clase dominante de hacendados y burgueses comerciales se legitimó como necesaria, frente a las clases dominadas, para desarrollar los destinos de la república.

La historia política de Colombia en el siglo XIX fue el proceso de la incubación de la propia clase dominante como una unidad más o menos sólida, unidad cuya conciencia de clase se tramitó de forma genuina (a diferencia de lo que ocurrió con el campesinado) a través de la diferencia partidista. El liberalismo y el conservatismo fueron los significantes de sus conflictos. No se consolidó una clase de burgueses empresarios industriales, como en el primer mundo, pues esta clase fue abortada luego de la Guerra de los Supremos. La incubación de esta clase implicaba el proteccionismo, que fue defendido por los conservadores, en el gobierno de José Ignacio de Márquez. No obstante, las condiciones fueron propicias a la burguesía comercial liberal. Así, la clase dominante decimonona pasó del proteccionismo inicial al librecambismo radical. En tanto la lucha se desarrolló contra el antiguo régimen colonial, se dio contra las instituciones fiscales proteccionistas para hacer el relevo del Estado en cuanto tuvo que ver con el comercio exterior, la exportación y la importación. Ahora bien, el gremio comercial se hizo él mismo hacendado, y esto muestra la unidad lograda de esta clase; las medidas liberales tomadas por los propios presidentes conservadores, que finalmente condujeron al triunfo de los liberales radicales en la Guerra de las Soberanías y la Constitución de Rionegro, estos hechos evidencian que, finalmente, la modernización unificó a la clase dominante, consolidación esta que se manifestó en el triunfo de la hacienda en simbiosis con el comercio. Hasta hoy, siglo XXI, esa simbiosis amenaza con ser una alianza sempiterna.

### **Liberalismo y conservatismo, los significantes del amo que suscitan el goce del esclavo**

#### **Violencia de medio siglo XX y Frente Nacional**

A mitad de siglo XX, un nuevo conflicto, coloreado por las centenarias banderas contrapuestas de los liberales y conservadores, volvió a emerger como un resucitado. Y su nueva emergencia ya no fue la misma. La violencia de medio siglo XX no fue igual que la de las guerras del

siglo XIX, pues los enfrentamientos corrieron a cargo de los campesinos, sin que tomaran parte directamente en esto las oligarquías mismas de la clase dominante. La oligarquía hacendaria-comercial supo, con la Regeneración conservadora, que el Estado como estructura material de su poder político y social efectivo podía repartirse entre liberales y conservadores (España, 1985; Guillén Martínez, 1986; Malagón Pinzón, 2006). La unidad de clase estaba, pues, dada. Estaba claro que las diferencias partidistas solo eran sendos significantes distintivos de posibilidades, alternas entre sí, del ser oligarca. Liberal y conservador, para el siglo XX, no eran ya más que un par de palabras primitivas con sentido antitético, cuyo poder ideológico si bien ya no enfrentaba, de manera ominosa, a las oligarquías en el poder, sí tuvo suficiente alcance para volverse el par antitético significativo que vehiculó una nueva violencia, la del siglo XX, en las zonas rurales de producción cafetera. La final unidad real de clase de la oligarquía en la Regeneración significó la ominosa consagración del quiebre imaginario de la clase campesina sometida y el aplazamiento histórico de su propia unidad real de clase.

La unidad de clase campesina había comenzado en el mismo siglo XX, antes del estallido de la violencia liberal-conservadora. Esta fue solo una forma de impedir aquella, los relatos de esta agresión entre “godos y cachiporros” abundan y han sido material para crónicas y estudios de caso (Molano, Álape, Ortiz, Arocha). Esta diferencia partidista fue la apariencia ideológica del proceso social de La Violencia, su cubierta simbólica e imaginaria cuyo núcleo duro real contenía la disputa por la tierra entre latifundio y campesinado. Para finales del siglo XX, M Uribe aún pudo entrevistar campesinos conservadores y recoger afirmaciones como las siguientes:

Nuestro pueblo estaba dividido en 10 veredas, cinco liberales y cinco conservadoras. Nosotros éramos conservadores y los liberales eran los extraños, los que vivían al otro lado del pueblo, los “cachiporros”. Eran la gente a la que uno le tenía miedo, eran la gente de allá. No es que fueran extraños porque uno sabía quiénes eran, pero eran gente mala.

Si uno cruzaba al otro lado de la vereda, allá decían lo mismo de nosotros. Para ellos, nosotros también éramos raros, éramos matones.

Las veredas nos separaban; los liberales no se juntaban con los conservadores y eso era lo que nos dividía. Se vive en paz donde no hay revuelta. Las matanzas son en los pueblos revueltos. Hay mucha zozobra cuando se está revuelto (Uribe, 1990, pp. 90-91).

Este testimonio es relevante para varios aspectos del proceso que aquí estudiamos. De nuevo, como en el siglo XIX, la importancia del espacio. El pueblo —recuerda María N, la campesina entrevistada por M. Uribe— estaba dividido en diez veredas literalmente *re-partidas*: cinco liberales, cinco conservadoras. La cantidad equitativa en la *re-partición* puede ser una mera coincidencia, pero lo que no es casual es la relación entre signo político y espacio. La vereda, en tanto forma de organización espacial es, por sí misma, una partición, y en este caso, el criterio de la *partición* es el *partido*. Se trata de una doble partición, es decir, exactamente una *re-partición*: una partición por el espacio y otra por el partido. En el testimonio de María N, nos da la impresión de que el criterio de la repartición del espacio veredal es el partido: lo liberal se dispersa en veredas liberales, lo conservador en conservadoras, y así se establecen unos linderos políticos para el espacio rural. Pero el lindero espacial es un asunto estatal que se resuelve ante el notario y pareciera, en el pensamiento burgués más honrado, que lo estatal no tiene por qué estar contaminado con el interés subjetivo implícito en el partido. Sin embargo, la conjunción entre vereda y partido, en este caso, desmiente ese aséptico principio burgués de la separación entre administración pública y política.

Pero veamos, ante todo, la vereda. Esta es la unidad más básica en que se expresa la organización territorial en el mundo rural. Así, al menos, nos lo informa J. E. Jaramillo (1988, p. 44) por medio de una cita de Fals Borda sobre las propiedades esenciales del espacio veredal. De acuerdo con Fals Borda, la vereda es un grupo social, etnocéntrico, autónomo y políticamente cohesivo. Esta definición no es del orden espacial, sino grupal, sin embargo, este grupo con estas características, necesariamente, mantiene una relación con el espacio, pues Fals Borda añade que depende de la sede municipal para la satisfacción de necesidades religiosas, económicas y administrativas y, además, sostiene un intercambio ecológico de sostenimiento con una región rural topográficamente limitada. Así, pues, a la vereda la hace el grupo en tanto es grupo en un espacio rural. Por esto, Jaramillo añade que, para Colombia, la vereda es la menor unidad antropogeográfica (Jaramillo, 1986, p. 44). En tanto Fals Borda adscribe a la vereda el carácter político de principio, esto implica que la formación de estas agrupaciones humanas, en un espacio rural básico, contaron con el criterio político para su aparición. Por eso, María N puede dar cuenta de lo liberal y lo conservador como un asunto de veredas. Ahora bien, ¿de dónde le viene ese criterio político al grupo en la vereda?

En el testimonio de la campesina María N, se evidencia, de forma prístina, la descripción de un fenómeno que Hegel denominó *reconocimiento*. Los lectores de la *Fenomenología del Espíritu*, la primera *Ciencia de la Experiencia*, precursora de la llamada epistemología y el culturalismo, conocen el pasaje de la autoconciencia, famoso en la historia de la filosofía moderna, en el que Hegel advierte que la autoconciencia, para realizarse como tal, necesita otra autoconciencia. Es decir, el saberse así mismo pasa por el saber de otro, que también se sabe a sí mismo. María N. atestigua que ellos, los de su vereda, eran conservadores porque los otros eran liberales que, a su vez, se sabían tales por ellos los conservadores. Sin embargo, ¿qué significa ser liberal, o qué significa ser conservador? De acuerdo con las palabras de María N, esos términos significan la diferencia: liberal solo tiene significación para el conservador y viceversa. Esto significa, como en la *Fenomenología* de Hegel, que el otro ha de ser superado, es decir, ha de ser destruido porque está revuelto en el espacio de la mismidad: “Hay mucha zozobra cuando se está revuelto” —concluye María N—. Es decir, el uno está con el otro en el mismo espacio. La relación —descrita en las palabras de María N— es una relación especular entre los campesinos, los unos veían a los otros tal como esos otros los veían a ellos, siendo todos, sin embargo, miembros de una misma clase social, pero repartidos en partidos políticos distintos. Y en efecto, fuera de esa diferencia de significante, liberal o conservador, los campesinos son iguales. La propia M. Uribe afirma: “Entre lo que comparten estaría la religión —sistema de creencias y de ritos—, el compadrazgo como práctica de reciprocidad entre ellos, los espacios de sociabilidad masculinos como bares, cantinas y prostíbulos y la frecuencia de matrimonios intercomunitarios.” (Uribe, 1990, p. 90). Son iguales. Lo que los opone, por supuesto, es la división entre conservador y liberal, división significante, prácticamente ancestral, como un apellido, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX.

Bajo la apariencia de cambio de siglo, bajo el manto contemporáneo del XX, el siglo XIX no se había extinguido, pues la pertenencia partidista se heredó, pasó de generación en generación, desde el siglo XIX, donde se originó. Y esa diferencia no nació de los campesinos, ni de las clases dominadas, sino de la clase dominante, los hacendados. Los campesinos la tomaron de sus amos y la preservaron a lo largo del siglo, hasta el siguiente. Esto significa que, en tanto la pertenencia partidista es criterio de la formación veredal, ese criterio, en este caso, no es el de los campesinos, sino el de sus amos. El criterio de la formación territorial es

el sentido del amo, no el del esclavo, porque la relación especular entre miembros de la misma clase los lleva a la oposición por vía del significante heredado en forma ancestral. Se saben iguales, pero esta autoconciencia no los lleva a la unidad, sino a la hostilidad, porque prima la oposición simbólica: conservador versus liberal. A través de la oposición simbólica no se toma conciencia de lo que se es, sino de lo que no se es. No se trata, entonces, de una autoconciencia genuina, sino de una falsa autoconciencia. Es una distinción ideológica que, mediante la oposición en el par significativo, heredado del amo, impide la unidad de clase. La dialéctica del amo y el esclavo —conocida de los lectores de la Fenomenología hegeliana— en este caso no se realiza en la liberación del esclavo, sino en el perpetuo goce del esclavo por realizar, con la violencia, el significante del amo.

La oligarquía, en sus conflictos decimonónicos, había estructurado su unidad y conciencia de clase atando al significante del partido al campesinado, en el desarrollo de una estructura paternalista hacendataria. Así, al menos hasta las primeras décadas del siglo XX. Pero el desarrollo de la producción cafetera, en el contexto de la estructura hacendataria heredada del siglo XIX, trajo consigo los primeros conflictos de clase contemporáneos entre latifundio y campesinado. La producción cafetera —como es sabido— permitió acumular parte del capital dinero que condujo al desarrollo industrial del siglo XX (Garay, 1998; Misas y Corredor, 2001; Perfetti et al., 2017), la emergencia mediocre de ese tercer gremio manufacturero abortado en el siglo XIX.

La agroindustria cafetera provenía del siglo XIX, luego de que decayera la anterior agroindustria, la del tabaco. El café, en el siglo XIX, había comenzado a ser producido por grandes terratenientes, hombres dueños de notable influencia política y recursos, v.gr. Mariano Ospina Rodríguez, uno de los fundadores del Partido Conservador. Este poder les permitió, a estos hacendados, tanto en el XIX como en el XX, diseñar políticas agrarias ajustadas a sus intereses (Bejarano, 1985; Palacios, 2002). Por otra parte, para estas burguesías cafeteras, por el hecho de estar basada su acumulación de capital en el comercio exterior, fue muy importante entregarse voluntariamente al capital transnacional. Esta entrega hacia afuera implicó, por otra parte, una alianza hacia adentro para compensar las pérdidas suscitadas por las fluctuaciones del mercado exterior. Fue una alianza interna entre dos grandes fuerzas (Misas y Corredor, 2001): los cafeteros, como principales proveedores de divisas (al inicio de la década del cincuenta, casi del 90 %), y los industriales, quienes

requerían la importación de bienes de capital a bajo costo. Los cafeteros permitieron una devaluación del peso que favoreció a los industriales como importadores de bienes de capital, a condición de que el Estado compensara las pérdidas con la banca de fomento y, también, les diera libertad para subir los precios internos del café. Esta burguesía industrial y cafetera, desarrollada en función de alianzas con los mercados exteriores, sabía poner entre paréntesis su nacionalismo frente a estos mercados exteriores, para guardar con ellos las mejores relaciones. Sus conflictos brotaban, al contrario, con quienes amenazaban su poder en el interior del país: los campesinos.

La unidad social de producción del café fue, inicialmente, la hacienda, esta, en sí misma, era un dispositivo de producción colonial (Guillén Martínez, 1986; Aponte, 2019, p. 9; Zamosc, 2009, pp. 55-61). La hacienda (bien fuera productora de tabaco, quina, caña o café) implicaba el trabajo servil extraído al aparcerero arrendatario. La modernización de la producción cafetera, en las primeras décadas del siglo XX, suscitó la lucha de clases entre hacendados y aparceros (Machado, 1994; Aponte, 2019; Palacios, 2002). Las reivindicaciones que se hicieron propias del aparcerero consistieron en la demanda de dejar de pagar arriendo en especie, así como el derecho a cultivar café en su propia parcela. Además, también, hubo una disputa por la tierra misma. El hacendado pretendió ganar dinero, en un mercado capitalista, sobre una base de trabajo colonial, casi servil, como la aparcería. Pero el aparcerero también quiso ganar dinero, vender café y poseer él mismo la tierra. Se organizó en sindicatos, se alió con los contrapoderes políticos de aquel entonces, el Partido Liberal, ansioso de recuperar su poder en la estructura del Estado, y el naciente *Partido Comunista* (Machado, 1994; Aponte, 2019). Puede decirse que la rara alianza entre el liberalismo y el comunismo, en las primeras décadas del siglo XX, posibilitaron el proceso de la constitución de la unidad de la clase campesina frente al latifundio y la oligarquía.

Por efecto del imperialismo británico del siglo XIX, la oligarquía colombiana orientó los destinos económicos de la república hacia la agroexportación, como lo hicieron varios países de América Latina (Carmagnani, 1984). En el siglo XX, sin embargo, no fue distinto: la agroexportación cafetera se constituyó en el eje del desarrollo industrial que contribuyó a urbanizar las ciudades en las primeras décadas del XX (Machado, 1994). Pero ya este siglo no fue el del imperialismo británico, sino del estadounidense, ante cuya tutela, por varios factores —entre ellos el desarrollo de la agroexportación cafetera misma—, se hincó

desde entonces la oligarquía colombiana. El siglo XX no solo posibilitó el desarrollo de la industrialización urbana, en función de la implementación del modelo de sustitución de importaciones, sino el de la industrialización rural, y esta trae aparejado el proceso social concomitante de la descampesinización, es decir, el declive del campesinado. Fue en este punto de la amenaza a su propia consistencia como clase que se suscitó la unidad de clase del campesinado.

La lucha de clases moderna, en Colombia, se planteó en el terreno de la disputa agraria por la tierra y el derecho a sembrar café. Los terratenientes, por su parte, igualmente se organizaron, emplearon su poder para forzar a los campesinos a dejar de cultivar café en su propia parcela y conminarlos a cultivar allí solo los productos que mantenían la alimentación, es decir, la fuerza del trabajo. La economía cafetera había traído la expansión de las haciendas y la ampliación de la frontera agraria, en particular en el sur del Tolima. A lo largo de las primeras tres décadas del siglo XX, la lucha entre aparceros y hacendados, por la producción de café y la tenencia de la tierra, trajo como consecuencias la colonización de baldíos y las tomas de haciendas. Cuando los liberales accedieron al poder del Estado, por primera vez en el siglo XX, tomaron medidas para apaciguar el conflicto, pero sus medidas, como la ley 200 de 1936, fueron inocuas (Le Grand Catherine, 1988). Por otro lado, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, los hacendados fraguaron su poder y unidad alrededor de una institución que, rápidamente, creció tanto en poder político como en poder económico y que, a lo largo del siglo XX, sirvió de fortaleza efectiva en las luchas contra el campesinado rebelde: la Federación Nacional de Cafeteros. Más de medio siglo antes del advenimiento del neoliberalismo ocurrido a finales del siglo XX, la Federación ya tenía la catadura anfibia de las organizaciones público-privadas, y respiraba tanto los idealizados vapores del interés público como los terrenos aires del codicioso interés privado; y en ambos ambientes estaba en su elemento.

Esta imbricación de una institución privada en el seno mismo de la estructura del poder público es la expresión real del principio consistente en que, en el capitalismo, el sector privado condiciona la formulación de las políticas que se han de ejecutar por el Estado territorial. En la Federación se materializó el punto de encuentro entre el interés público y el privado como una zona de sombra en la que no se distinguen el uno del otro. La oligarquía que controlaba el Estado era la misma que se dedicaba a la exportación del café. Por esto, lo que nació como

institución privada en el seno de la sociedad civil terminó convirtiéndose en una institución que tomaba decisiones de política económica, para poder controlar tanto la producción directa del café, en manos de los campesinos y jornaleros, como los fondos de financiación del desarrollo de la estructura productiva misma. De este modo, logró el dominio total de la circulación interna del grano con miras a la exportación. Aunque la Federación no tuvo control sobre los precios internacionales y, además, la tasa de ganancia se vio afectada por esos cataclismos económicos internacionales que fueron la crisis de 1929 y las dos guerras mundiales, no obstante, controló completamente la producción y circulación internas, lo que le permitió compensar los golpes externos.

El desarrollo del capitalismo basado en la agroindustria del café se sostuvo a pesar de La Violencia. La producción y comercialización del café continuaron intactas pese a que las masacres y desalojos se producían con virulencia en las regiones cafeteras. Esto implica que existía una relación entre la economía cafetera y la violencia: la primera contuvo la segunda, mientras que esta última se alimentó de aquella. En esta simbiosis, mediante la violencia se podían cambiar los propietarios de las haciendas, abaratar los precios de la tierra y especular con los precios del producto. Esto dejaba al sistema económico general intacto, porque la violencia, en este caso, no arremetió contra el sistema mismo, no fue una violencia revolucionaria, sino que arremetió contra los agentes puntuales del sistema reemplazando unos por otros. Y es por este hecho, de que tanto las tierras como la comercialización inmediata cambiaban de manos liberales a conservadoras y viceversa, sin alterar el proceso económico como tal, que es menester sostener que La Violencia se enraizó en un proceso más amplio: el de evitar el levantamiento general en el agro y desviar el potencial del conflicto real a lo simbólico liberal-conservador; pues el conflicto en lo real que sí podría dar al traste con el proceso económico entero: el levantamiento nacional de las clases dominadas contra la oligarquía. La violencia liberal-conservadora afectó a los productores y comercializadores inmediatos, pero no a la gran oligarquía liberal-conservadora exportadora de café entronizada en el poder efectivo del Estado.

La Violencia fue un expediente iniciado por la oligarquía conservadora para quebrar, internamente, mediante el conflicto banderizo, al movimiento campesino potencialmente revolucionario en la zona andina, justamente, en la que la industria agroexportadora del café tenía su epicentro. Sabido es que, por su parte, en el desarrollo de la violencia

partidista, el Partido Liberal, desde su alta dirigencia, es decir, desde sectores de la misma oligarquía liberal, aprovechó a los campesinos, alzados en armas contra el gobierno conservador, como un instrumento de guerra contra ese mismo gobierno conservador al que pretendían derrocar. Aparentemente, al igual que en el siglo XIX, la oligarquía empleaba los campesinos en sus luchas internas. Sin embargo, pronto la escisión de clase quedó explícita: los hacendados liberales se unieron con los conservadores y rechazaron a la guerrilla campesina. Así mismo, los altos dirigentes liberales, iniciada la dictadura del general Gustavo Rojas, desdijeron ellos también del movimiento guerrillero de los Llanos Orientales (Álape, 1985, pp. 93-94); y en las galas y el kepis del general Rojas encontraron las oligarquías liberal y conservadora un punto de disolución de sus diferencias simbólicas, un catalizador para efectos de un segundo Frente Nacional. Así, pronto —apenas iniciada la dictadura de Rojas y declarada la amnistía general para los alzados en armas—, los líderes inmediatos de la guerrilla campesina liberal, el dirigente intelectual, José Alvear Restrepo y el jefe militar, Guadalupe Salcedo, fueron asesinados.

La disolución de la guerrilla campesina liberal era necesaria para la consolidación del segundo Frente Nacional. El partido liberal, como expresión de la unidad de clase de la oligarquía, por virtud del golpe militar, pactó una vez más con sus similares, los conservadores. Al no necesitar el instrumento militar de la guerrilla campesina, este sucumbió; y es que, en últimas, la movilización armada del campesinado liberal había sido puesta en acción, inicialmente, por efecto de la amenaza de los paramilitares conservadores —pájaros y chulavitas—; uno de los comandantes sobrevivientes de la guerrilla liberal, Plinio Murillo (alias Capitán Veneno) —citado por Álape 1985, p. 125— afirmó que, en realidad, el problema de la guerrilla liberal del Llano no era la tenencia de la tierra: “[...] aquí en los Llanos, en ese entonces, no había ese problema. La mayor parte de la tierra eran baldíos. Todo el mundo podía trabajar donde quisiera y el que trabajara e hiciera su fundo era su dueño más adelante”. Estas palabras del capitán Veneno, aunque en principio niegan la relevancia del problema de la tenencia de tierra, en realidad son el punto de vista del campesino mismo, que si bien está en guerra contra su opuesto por la bandera del amo, no advierte que si cada uno puede tomar su propio fundo en el amplio Llano es porque están justamente en la frontera agraria. Es decir, el conflicto banderizo es más que una guerra entre dos colores, es una en la que el hecho de tener que organizarse implica haber abandonado sus fundos para rebuscarse otros más afuera. El

hecho de que la amnistía del general Rojas haya sido el comienzo del fin de la guerrilla liberal muestra que, en últimas, no había aún unidad de clase en este campesinado que aún obedecía los mandatos del color del partido. Solo los dirigentes directos tenían alguna claridad, por eso, Alvear Restrepo y Guadalupe Salcedo tuvieron que morir para no convertirse en obstáculos del proceso de amnistía.

Puede decirse que, si bien la guerrilla liberal fue un conato de resistencia del campesinado en sí mismo, la auténtica conciencia de clase se organizó a instancias del comunismo. González sintetiza la historia del comienzo de las ideas políticas socialistas y comunistas en Colombia, como un proceso en la segunda década del siglo XX, proceso que abarca desde las primeras huelgas en la costa Caribe, a finales de la primera década, hasta el fracasado movimiento insurreccional nacional del año 1929 (González, 2014, pp. 232-239). Pero concretamente, el proceso de organización del campesinado a instancias de las ideas del comunismo maduró en la zona andina, en la zona del Sumapaz y el sur del Tolima. El desplome de las guerrillas liberales del Llano, por obra y gracia de una decisión de la oligarquía liberal en Bogotá, no tuvo su contraparte homóloga en las guerrillas comunistas de la región de Villarrica, en el sur del Tolima. Allí, el gobierno militar de Gustavo Rojas debió concentrar sus esfuerzos militares, valga decir que en vano.

Luego de la dictadura, cuando la oligarquía se restituyó al poder de forma explícita y directa, en el Frente Nacional, el conflicto continuó, pero ya no en términos del bipartidismo de la primera mitad del siglo. Ahora el conflicto fue contra el comunismo y, en este orden de ideas, ya fue un conflicto directo de clase, sobre todo en el sur del Tolima, un área de la región andina dedicada, desde el siglo XIX, a la producción cafetera, en grandes haciendas. Ya desde la época del Olimpo Radical, la agricultura cafetera en la región había ejercido la expulsión de comunidades indígenas y el crecimiento de la mano de obra disponible por efecto de la liberación de los esclavos (Aponte, 2019, p. 58). Para la primera mitad del siglo XX, la hacienda cafetera en el sur del Tolima había entrado en crisis, en la medida en que el pequeño propietario, el campesino, se enfrentó al latifundista. En esta lucha, el latifundista hizo lo que estuvo a su alcance para limitar las pretensiones del campesino, y le impuso restricciones en la comercialización del café, el acceso a la propiedad, los pesos y las medidas (Aponte, 2019, p. 62). Fue aquí cuando el comunismo, mediante sus partidos, el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el

Partido Comunista de Colombia (PCC) intervino al elaborar la interpretación de los intereses de los campesinos frente al latifundio.

Ha sido documentada la historia y la experiencia de las insurgencias campesina y comunista en el desarrollo de la violencia, en principio contra la agresión conservadora, pero posteriormente en el contexto de la pacificación iniciada por el general Gustavo Rojas y continuada por el Frente Nacional: en el contexto de esta pacificación, el liberalismo, antes aliado del comunismo, se tornó en su enemigo y es sabido que caudillos liberales se aliaron con el ejército oficial para enfrentar a las guerrillas campesinas comunistas, como ocurrió en la situación de El Davis, Huila (González, 2014, pp. 307-308). Luego, en el sur del Tolima, esta diferencia se desarrolló como la guerra entre los liberales limpios y los comunes, los primeros se caracterizaron, según Aponte (2019, pp. 80-86) por ser un sector del campesinado medio, bien establecido, que luego de la amnistía de Rojas, por estar relacionados con las redes clientelares tradicionales del liberalismo se aliaron con el ejército para expulsar a los comunistas. Se trató, evidentemente de una clase media campesina que, aliada un momento con los campesinos comunistas sin tierra, contra el ataque conservador, ahora, terminado este, se volteó en contra de los campesinos sin tierra. El desarrollo de este cambio de bando llevó a una deriva harto conocida en la violenta historia agraria de Colombia, cuyos efectos siguen resonando en las zonas rurales de la altillanura y la selva.

## Conclusión

La oligarquía colombiana hizo consciente su poder, en siglo XIX, mediante la oposición de pares antitéticos: los primeros fueron federalismo-centralismo; después conservatismo-liberalismo. Estos significantes primitivos identificaron a la oligarquía para sí misma mediante una división de la concepción administrativa. Además, estos significantes fungieron también, mediante un contenido ideológico (libertad, piedad), como puntos de adhesión de las clases dominadas.

Para el siglo XX, la lucha de clases explícita contra el campesinado se tramitó al abrigo de la oposición simbólica decimonona, liberal-conservador, gracias a que esta oposición había sido el punto de anclaje ideológico en el siglo XIX. Frente al campesinado, en el siglo XX, se suscitó un nuevo par significante: democracia-comunismo. Este último par permitió, luego del Frente Nacional, consolidar la conciencia del poder

como democrático y el fin de la hegemonía del par simbólico originario, liberal-conservador.

Estas elaboraciones simbólicas e imaginarias de la clase dominante, en todos los casos, presupusieron una clase dominada contra la cual se objetiva ese control: el campesinado. Pues la oligarquía ha sido una oligarquía hacendaria. Su conciencia de clase se ha consolidado frente a la expulsión de otro real, el campesino pobre, potencialmente insurgente. La hacienda decimonona permitió la construcción de un paternalismo en el que el campesinado mismo se repartió los símbolos banderizos de esa oligarquía. Pero disueltas las diferencias imaginarias en el seno de la propia oligarquía, los campesinos sostuvieron la diferencia simbólica, en el siglo XX eso permitió el control del campesinado para reprimir su levantamiento como clase, y desvió la violencia revolucionaria hacia una violencia partidista. Finalmente, el chivo expiatorio del comunismo dejó atrás la escisión simbólica originaria, liberal vs conservador, para instaurar otra, democracia vs comunismo. Una menos local, incluso internacional.



## Reconocimientos

Este artículo de reflexión forma parte de la investigación titulada Análisis de la Capacidad Institucional del Estado colombiano para la Reforma Agraria 1990-2022. Desarrollada por el Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, Categoría C, MINCIENCIAS. Investigación Financiada por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Convocatoria Interna para financiación de proyectos de investigación 2023-2024.



## Sandra Milena Polo

Licenciada en Ciencias Sociales, Magistra en Historia Pontificia Universidad Javeriana y Doctora en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP. Autora de los artículos: Movilización popular en Bogotá en la segunda mitad del siglo XIX: el caso del Motín del Pan del 23 de enero de 1875; Los artesanos bogotanos y el antilibrecambismo 1832-1836; TLC con Estados Unidos y los argumentos de legitimación de la oligarquía colombiana. Investigadora líder del Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, grupo categoría C. MINCIENCIAS



## Germán Carvajal

Filósofo, Magister en Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Docente de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP. Autor de los libros: *Metafísica de la proliferación instrumental*; *El Concepto de Tecnología*; y Co- autor de los libros: *Investigación y Educación. Hacia una teoría del campo*; *Metodología e Investigación. Una discusión a propósito de la teoría del Campo*. Investigador del Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, grupo categoría C. MINCIENCIAS.

## Referencias

- Álape, A. (1985). *La paz, la Violencia: testigos de excepción*. Editorial Planeta.
- Albertus, M. (2021). *Las reformas agrarias en Latinoamérica* (R. Taborda, Trad.). Universidad del Rosario.
- Aponte, A. (2019). *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016*. CINEP.
- Bejarano, J. (1985). *Economía y poder: la SAC y el desarrollo agropecuario colombiano 1871-1984*. CEREC-SAC. <http://hdl.handle.net/20.500.12324/34496>.
- Carmagnani, M. (1984). *Estado y sociedad en América Latina, 1850-1930*. (P. R. Ferrer, Trad.). Editorial Crítica. (Trabajo original publicado en 1982).
- Colmenares, G. (1997)(1968). *Partidos políticos y clases sociales*. Tercer Mundo Editores. La Carreta.(Trabajo original publicado en 1968)
- CONtextoganadero. (30 de diciembre de 2016). *Una Lectura rural de la realidad colombiana*. <https://www.contextoganadero.com/politica/2016-el-ano-del-atropello-del-gobierno-santos-contra-el-sector-ganadero>
- Deleuze, G. (1994). *Lógica del sentido*. (M. Morey, Trad.). Ediciones Paidós. (Trabajo original publicado en 1969).
- España, G. (1985). *La guerra civil de 1885: Núñez y la derrota del radicalismo*. El Ancora editores.
- Garay, L. (1998). *Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967- 1996*. Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Colciencias.
- Gonzalez, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Odecofi-CINEP.
- Guillén Martínez, F. (1979). *El poder político en Colombia*. Editorial Punta de Lanza.
- Guillén Martínez, F. (1986). *La Regeneración, primer Frente Nacional*. Carlos Valencia Editores.
- Gunder-Frank, A. (1973). *Lumpenbuesía: Lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica. Estados Unidos y América Latina*. Periferia.
- Jaramillo, J. (1988). *Estado, Sociedad y Campesinos*. Tercer mundo editores.

- Kalmanovitz, S. (2003). *Economía y Nación: una breve historia de Colombia*. Grupo Editorial Norma.
- LeGrand, C. (1988). *Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950*. Universidad Nacional de Colombia.
- Machado, A. (1994). Una mirada retrospectiva. En S. Kalmanovitz, *Transformaciones en la estructura agraria*. 97-126 Tercer Mundo.
- Machado, A. (2009). *La reforma rural: una deuda social y política*. Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) – Universidad Nacional de Colombia.
- Malagón Pinzón, M. (2006). La regeneración, la Constitución de 1886 y el papel de la Iglesia Católica. *Civilizar*, 6(11), 63-75. <https://doi.org/10.22518/16578953.764>
- Malagón, M. (2005). La historia del control de las administraciones públicas en la colonia. *Civilizar*, 5(9), 59-74. <https://doi.org/10.22518/16578953.705>
- Marx, C. y Engels, F. (1987). *La ideología alemana*. (W. Roces, Trad.). Akal. (Trabajo original publicado en 1845).
- Marx, C. (1974). Contribución a la crítica de la Economía Política. En C. Marx & F. Engels, *Obras. 181-232 Escogidas*. Editorial Progreso. (Trabajo original publicado en 1859).
- Misas, G. y Corredor, C. (2001). *Desarrollo económico y social en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- Osorio Rauld, N. (2015). Dominación y reproducción de las élites. Lectura sociológica del proceso de estructuración de las minorías selectas en el elitismo clásico. *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 14(2), 113-130. <http://dx.doi.org/10.15304/riips.14.2.2469>
- Ospina Vásquez, L. 1974 (1974). *Industria y protección en Colombia 1810-1930*. Editorial La Oveja Negra.
- Palacios, M. (2002). *El café en Colombia 1850-1970*. Editorial Planeta.
- Paredes, C.S. (2014). Federalismo y centralismo en los orígenes de la Colombia contemporánea. *História*, 33(2), 330-345. <https://doi.org/10.1590/1980-436920140002000016>.
- Peña, E. (1973). *Origen y desarrollo de la burguesía colombiana*. [s.e].
- Perfetti, J., Botero, J., Oviedo, S., Higuera, S., Correa, M., y García, J. (2017). *Política comercial agrícola: nivel, costos y efectos de la protección en Colombia*. Fedesarrollo. Fedesarrollo-EAFIT
- Rubio, B. (2012). *Explotados y Excluidos. Los Campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*. Plaza y Valdés Editores.
- Uribe, M. V. (1990). *Matar, rematar y contramatar. Las masacres de La Violencia en Tolima 1948-1964*. CINEP.
- Zamosc, L. (2009). *The agrarian question and the peasant movement in Colombia. Struggles of the National Peasant Association 1967-1981*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511558948>